

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN CANTABRIA

MARCOS GÓMEZ PUENTE

Catedrático de Derecho Administrativo

Universidad de Cantabria

En el período cubierto por esta crónica y por lo que respecta a la región cántabra, se ha tenido conocimiento de las siguientes sentencias de interés ambiental:

— STSJ de 25 de octubre de 2012 (vertedero de Celada Marlantes). Este fallo resuelve el recurso planteado por Ecologistas en Acción contra la autorización de una planta de reciclaje y vertedero de residuos de construcción y demolición, el cual también cuestiona indirectamente la legalidad del Decreto 15/2010, de 4 de marzo, por el que se aprueban los Planes Sectoriales de Residuos que desarrollan el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010. La Sala considera que una autorización otorgada a reserva del cumplimiento de la legislación urbanística difícilmente puede vulnerarla; que tampoco puede considerarse falta de motivación o arbitraria una autorización que incorpora una declaración de impacto ambiental y viene precedida de informes que obran en el expediente; y que tampoco puede considerarse infringido el artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, ni el artículo 14 del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, por el hecho de que se hubiera autorizado el proyecto sin haberse aprobado aún los planes sectoriales de residuos que, en desarrollo del Plan de Residuos de Cantabria, debían determinar los lugares apropiados para la eliminación de residuos.

La Sala advierte, en efecto, que la vigente Ley 22/2011, de 28 julio, de Residuos y Suelos Contaminados, dictada para incorporar la Directiva 2008/98, de 19 de noviembre, en lo que respecta a la función y las determinaciones de los planes de residuos, ya no se refiere a “los lugares o instalaciones apropiados para su eliminación”, sino a la inclusión de “criterios de emplazamiento” y que, en el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (S. de 1 de abril de 2004), en relación con directivas previas, también había concluido que dichos planes no debían necesariamente incluir la localización precisa de los lugares de eliminación de residuos, aunque sí criterios para la localización de los lugares de eliminación a la luz de los objetivos perseguidos por la Directiva (entre los que se encuentran la salud pública y del medio ambiente, así como la creación de una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación teniendo en cuenta las mejores tecnologías disponibles que no impliquen costes excesivos). Por consiguiente —entiende la Sala—, no es tanto el requisito formal de la existencia de un plan previo lo que debe tenerse en cuenta al enjuiciar la legalidad de una autorización, sino su contenido sustantivo, en función de los bienes superiores

protegidos, en lo que respecta a la localización. Y habiéndose podido constatar que antes de autorizar el proyecto se ha analizado “de forma muy especial la ubicación por considerar la selección del emplazamiento del vertedero [de residuos que no supongan riesgo de contaminación] de vital importancia, conjuntando la evitación de riesgos ambientales y asegurando su correcta funcionalidad ya desde el documento de síntesis”, y teniendo presentes los criterios de la jurisprudencia y de la vigente Directiva comunitaria, ningún reproche de ilegalidad puede hacerse a la autorización.

— STSJ de 31 de octubre de 2012 (carretera de la ría Capitán). La Sala estima parcialmente el recurso de Ecologistas en Acción contra la aprobación del proyecto de una carretera y su correspondiente declaración de impacto ambiental, a los que se imputaban diversas infracciones de la legislación ambiental. Así, la Sala comparte que el proyecto aprobado afecta tangencialmente a un lugar de importancia comunitaria (LIC) y que, a pesar de ello, no se estudiaron ni valoraron adecuadamente las afectaciones ambientales sobre este ni se adoptaron las medidas precisas para evitarlas o compensar o paliar sus efectos negativos, tal y como exigen la Directiva 92/43/CEE y la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

— STSJ de 8 de noviembre de 2012 (sanción por obras en ribera fluvial). Confirma la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico a un particular que llevó a cabo obras (cerramiento de una parcela con malla y postes metálicos sobre un murete de hormigón) dentro de las zonas de servidumbre y policía de cauces del arroyo Sobardo.

— STSJ de 8 de noviembre de 2012 (sanción por causar daños al dominio público forestal). Confirma la sanción impuesta por no haber adoptado la cautela necesaria para la realización de una quema controlada autorizada que finalmente se convirtió en incendio y se propagó por parte de un monte público.

— STSJ de 14 de diciembre de 2012 (discrepancia en declaración de impacto ambiental). La Sala resuelve el recurso interpuesto contra un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad, resolviendo las discrepancias entre las consejerías competentes en materia de protección ambiental y de obras públicas a favor del criterio de esta última y en relación con el proyecto para la construcción de una carretera. Rechazando los argumentos de la asociación ecologista recurrente, entiende la Sala que

sí se habían incorporado al expediente los informes precisos para resolver la discrepancia; que en este trámite de discrepancia no resulta precisa la información pública; que no se vulnera el principio de prevención en la medida en que se trata de una carretera ya construida, aunque sea por un trazado distinto del sugerido por la DIA, sin que la discrepancia tratara de legalizar una situación ilegal; y que no se ha acreditado la afectación a ningún hábitat prioritario.

— STSJ de 14 de diciembre de 2012 (sanción por actividad ilegal: camping). La Sala confirma una sanción de 150.000 euros impuesta por el ejercicio de una actividad sin disponer de la licencia que incorpore la pertinente comprobación ambiental o en contravención sustancial de los términos de esta (se habían ampliado ilegalmente las instalaciones del camping, de manera que se modificaron sustancialmente los términos de la actividad inicialmente autorizada sin haber sometido a evaluación dicha modificación sustancial).

— STSJ de 19 de diciembre de 2012 (inclusión de terrenos en POL). Se cuestionaba en este proceso la legalidad del Decreto 14/2011, de 24 de febrero, por el que se incluían determinados terrenos del municipio de Piélagos en el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral (POL). La Sala considera que la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, por la que se aprobó el POL, autorizaba al Gobierno a actualizarlo o modificarlo e incluir nuevos terrenos del área costera, siempre que se hiciera en los supuestos y por los procedimientos contemplados en ella.

— STSJ de 21 de diciembre de 2012 (actualización de POL). Se cuestionaba en este proceso la legalidad del Decreto 13/2011, de 24 de febrero, por el que se incluían determinados terrenos del municipio de Piélagos en el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral (POL). A diferencia del caso anterior, en esta ocasión se estima el recurso contencioso-administrativo por entender que no se daban los presupuestos legalmente exigidos para actualizar o modificar la delimitación territorial del POL (en este caso, se descarta la existencia del error de cartografía alegado por la Administración regional).

Importa aquí recordar, por último, que por Sentencia de 22 de abril de 2013 el Tribunal Constitucional ha resuelto la primera de las cuestiones de inconstitucionalidad (núm.

4596-2011) planteadas en relación con el artículo 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de los artículos 149.1.6 y 149.1.18 CE en relación con los artículos 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la Constitución (las demás cuestiones pendientes por el mismo precepto llevan las referencias 5727-2011, 5728-2011, 5799-2011, 6192-2011, 6193-2011, 22-2012, 23-2012, 539-2012, 540-2012, 845-2012, 1525-2012, 1986-2012, 2465-2012 y 5660-2012; más recientemente también han sido admitidas a trámite las cuestiones de constitucionalidad núm. 1457-2013 y 5659-2012, igualmente relacionadas con la citada disposición adicional sexta y la posible vulneración de los preceptos antes citados).